

(Publicado en “El Periódico” de Aragón el 18-II-2010)

## **Corrupción**

Guillermo Pérez Sarrión  
gperez@unizar.es

Debo empezar confesando a los lectores mi desconcierto: tenía pensado escribir este artículo sobre un caso de corrupción concreto y al poco la realidad, que tantas veces muestra las miserias del ser humano mejor que cualquier novela, convirtió cualquier análisis individual en una tarea infantil. En estos momentos hay tantos procesos por corrupción urbanística en los tribunales —da miedo imaginar cuántos más no habrán sido detectados aún— que hablar de uno solo ya es minucia. El PSOE y el PP tienen la mayoría, casi a partes iguales. Corrupción, vieja amiga de la política española, que te vas para siempre volver.

Vivimos tiempos de culto al sentimiento, de alergia a la razón, a la vieja razón promovida por los modernos y la Ilustración. En ese contexto, como decía recientemente un intelectual italiano, aplicar el sentido común para resolver los problemas puede ser realmente revolucionario. Y eso es directamente aplicable a la cuestión: lo que pasa lo sabemos todos, incluidos también los dirigentes del PP, PSOE, y Unió Mallorquina, y CiU, y el Partido Aragonés, y otros. Y explicarlo exige usar el sentido común. Razonar.

La corrupción en la política española es un animal que camina con tres patas, nacidas todas ellas en la transición política de la dictadura a la democracia. La primera es una ley de financiación de los municipios insuficiente; se les pide cada vez más servicios y para pagarlos se consiente que recurran a los expedientes urbanísticos y las recalificaciones, y no se les dan medios suficientes para pagar los servicios que prestan. Ese es el origen del desaforado interés por urbanizar por parte de políticos locales que además incluso llegan a asumir que hay que pagar este peaje para poder dar más servicios a los ciudadanos.

La segunda pata es la ley electoral, que funcionó bien para la transición política pero que hoy es para la sociedad española como un traje pequeño. Con listas cerradas y bloqueadas, los políticos tienen asegurada su reelección si el aparato les coloca en un buen puesto: no tienen que dar cuenta de su gestión a sus votantes, sólo a las ejecutivas que les ponen en la lista. En los partidos, los intereses de los ciudadanos están secuestrados por una costra de políticos profesionales más interesada en perpetuarse en el puesto que en abrir el partido a la sociedad. Hoy el PP, el PSOE o el PAR simplemente ya no son organizaciones democráticas como hace dos décadas. Quizás se llamen así, pero no lo son en realidad. Moverse en su interior es asunto de profesionales, no de aficionados, de simples militantes: dejadnos a nosotros, somos los que sabemos cómo se hace, se les dice. Y allí van, una vez más, a asambleas siempre extraordinarias, convocadas con listas filtradas y controladas, sin debate, sin ruegos y preguntas molestos. Por eso sus dirigentes hace tiempo han perdido el contacto con la realidad, blindándose tras gabinetes de prensa cada vez mayores. Esto explica la creciente desconfianza de los votantes hacia los partidos políticos, incluso hacia aquellos a los que venían votando y querrían seguir votando.

La tercera pata es una financiación opaca de los partidos políticos, cuya contabilidad está obligada a incluir las cuentas de las sedes centrales pero no las de las sedes locales ni las de la maraña de empresas y fundaciones que funcionan

alrededor suyo. Cuando un político como Rajoy dice —como ha dicho— que las cuentas de su partido son transparentes dice algo a primera vista cierto —porque las cuentas centrales que se ven sí lo son— pero en realidad falso, porque las cuentas de sus organizaciones locales, que son las que no se ven, no tienen ningún tipo de control.

Y cuando se cruzan los tres factores la corrupción surge casi sin remedio. Los ayuntamientos necesitan dinero, no tienen ingresos suficientes y recalifican para tenerlo; los concejales de esos ayuntamientos saben —o se les hace saber— que sus partidos necesitan dinero, y saben también que sus agrupaciones locales tienen poco control, con lo que la tentación de rebañar en forma de comisiones está servida. Y si no les pilla la justicia saben que están blindados. La ley electoral les protege de las iras de los ciudadanos porque el próximo escaño lo conseguirán si su ejecutiva decide incluirles en la lista en puesto de salir, no si gustan más o menos a los electores. Añadamos al cóctel unas gotitas de debilidad humana, de deudas personales, de falta de ética política, y tenemos el panorama completo.

Mientras el gobierno no aborde en serio modificar las tres leyes de que hablo la corrupción se seguirá produciendo, antes o después, en un lugar u otro, y con un partido u otro. Y con la que está cayendo, no veo que vaya a hacerlo. Sus gabinetes de prensa les dicen que eso no es una prioridad ahora. Es falso: lo era antes y lo sigue siendo. La crisis de la deuda, el paro, las tensiones con los nacionalismos, no cambiarán esto. La corrupción puede que deje de centrarse en ladrillo si la construcción deja de tener un peso preponderante, pero encontrará otras vías para surgir y desarrollarse, y puede que más. Miremos a Italia. Miremos a México. Esto es así.